

Imprimir

Inicio este escrito contra argumentando las declaraciones que recientemente realizó Francisco Barbosa[1], quien dijo públicamente que el tema de los líderes sociales solo se evoca a partir del 2016, fecha en la que se firma los acuerdos de paz entre el anterior gobierno de Santos y la exguerrilla de las FARC. Según el Alto Consejero de Derechos Humanos del gobierno actual, antes de esta fecha no existía el tema de líderes sociales, y sus argumentos apuntan a que los asesinatos de líderes sociales son producto del gobierno anterior. Por si no se ha enterado o no se quiere enterar el actual gobierno, el tema de los asesinatos de líderes sociales no es nuevo: históricamente en Colombia se han acribillado a los líderes sociales que por alguna causa, alzan su voz de protesta contra los atropellos de los poderosos que están en los estamentos económicos, políticos y gubernamentales. Para muestra, los siguientes botones: Jorge Eliecer Gaitán Ayala (1948) y Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Carlos Pizarro León-Gómez (1990) entre otros[2]. Sin desconocer la importancia de los líderes de base que en los distintos gobiernos de Colombia fueron arrasados, en los años 80 el exterminio de los simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en los 90 las grandes masacres perpetradas por los paramilitares; y la política de Seguridad Democrática en 2002-2010.

Según estas declaraciones, presuntamente el alto consejero de DH actual, desconoce los diversos informes que se han realizado sobre asesinatos y líderes sociales generados antes de 2016 a nivel internacional. Por ejemplo, las Naciones Unidas[3], la CIDH[4], y a nivel nacional los informes que muchas organizaciones sociales, étnicas, profesionales y académicas presentaron en el pasado, sobre las atrocidades que se generan contra los líderes sociales no solo de base, comunales, movimientos sociales, sino también sindicales, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras y defensores del medio ambiente. Entre estos se encuentra el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, investigaciones académicas importantes del CINEP[5] y el CNMH sobre diversos temas (desplazamientos, masacres y muertes selectivas) han demostrado que entre las víctimas del conflicto inmersamente están los líderes sociales de diversas denominaciones.

En las declaraciones del consejero de Derechos Humanos Francisco Barbosa, el gobierno anterior no dejó una política pública para atender el tema de asesinatos de líderes sociales.

Por su puesto que no, para el gobierno Santos el tema de los asesinatos de los líderes sociales inicialmente, según su ministro de Defensa, era un tema de “*líos de faldas*”[6], por lo tanto, solo se tomaron medidas legislativas a pocos meses de culminar su mandato, sin que ello desmerite como un importante avance[7] en esta problemática. Además, no hubo tiempo para desarrollar una política pública por el cambio de gobierno. Estos avances normativos según las declaraciones de Francisco Barbosa, no son de importancia, ya que se intuyen, están en consonancia con intereses distintos.

Es cierto que los asesinatos de líderes sociales se desbordaron desde la firma de los acuerdos de paz, pero no en el sentido en que lo quiere hacer ver el consejero Barbosa: se desbordaron porque hay una clara relación[8] con los municipios priorizados[9] por el proceso de paz y territorios que han sido foco de la violencia por motivos de tierras, intereses económicos sociales y políticos, narcotráfico, cultivos de uso ilícitos, megaproyectos y disputa de diversos grupos ilegales en territorios despejados por la desmovilizada FARC, casos como Tumaco - Nariño, el Cauca, Alto Cauca donde se desarrolla el proyecto Hidroituango[10], y al no estar el enemigo común (las FARC) se evidencian no solo los asesinatos de líderes, sino la complejidad nacional que enfrentamos como país, por los altos niveles de corrupción.

El actual gobierno, por ser hereditario del gobierno de la Seguridad Democrática (2002-2010), como es costumbre en este lado del poder político, desconoce por conveniencia los esfuerzos realizados del anterior gobierno Santos, minimizando en materia de los logros alcanzados por el proceso de paz, como la disminución de la violencia en confrontaciones bélicas entre fuerza pública y grupos al margen de la ley y con ello la baja en las cifras de muertes tanto de soldados como de insurgentes; sin embargo, la visibilidad de otros actores armados se agudizó tanto como la visibilidad de la corrupción de las instituciones del Estado, corrupción que no tiene importancia en medios masivos de comunicación del país y que insisten en imponer el discurso del miedo y de la guerra ya que hacen parte del poder.

Diversas organizaciones y entidades del país se han tomado la tarea como en años anteriores, en materia de vulneración de derechos humanos, de realizar valiosos

informes[11] frente a la sistematicidad de los asesinatos de estos líderes y al peligro que se encuentran muchos en este momento. El CINEP, el IEPRI de la Universidad Nacional, la Comisión Colombiana de Juristas, Verdad Abierta, la organización Ríos Vivos, entre otras organizaciones son las que realmente han puesto su interés en mostrar los patrones que muestran los líderes asesinados y muchos de estos patrones coinciden más por la geografía social y política donde están ubicados, por los diversos conflictos sociales, políticos y ambientales en los que se suscriben sus peticiones de defensa a la tierra, a la vida, al medio ambiente, a los derechos humanos, ante el Estado que muchas veces se convierte en un verdugo más.

Por estas razones, no creo que solo sea mera coincidencia, creo que nuestros líderes los quieren seguir invisibilizando y los están asesinando por falta de voluntad política para brindarles protección, falta de voluntad política que por supuesto hace parte de un proyecto de país donde no caben los líderes y la protesta social. Esa falta de voluntad política que le dijo no al plebiscito, esa misma falta de voluntad política que ha hecho todo lo posible por destrozar los acuerdos de paz firmados con las FARC y que por quedar bien internacionalmente, muestra un discurso diferente. Esa falta de voluntad política que hoy le está dando la espalda al proceso de paz con el ELN[12], y nuevamente volvemos al conflicto armado declarado, que tiene la insensatez de seguir mostrando al anterior gobierno como el gran culpable de que de nuevo *"la guerra"* como ellos lo llaman, vuelve a mostrar sus fauces; esa falta de voluntad que desde hace mucho tiempo en sus medios de comunicación cómplices nos ofrecen miedo y nos venden seguridad y que nos imponen que valen más unos muertos que otros, incitándonos a la agresión en las calles en marchas contra del *"terrorismo"*. Colombia es el país de los contrastes, donde votamos NO a la paz, pero nos quejamos de la guerra.

Yeny Girón, Politóloga, investigadora y docente universitaria.

Foto tomada de: El Espectador

---

[1] Alto Consejero para las Derechos Humanos del Gobierno de Iván Duque. Ver la entrevista en este

link: <https://conexioncapital.co/que-esta-haciendo-ivan-duque-proteger-lideres-sociales/>

[2] Ver compilación del espectador. Recuperado

en: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-anos-turbios-de-asesinatos-lideres-politicos-galeria-686054>

[3] Ver informes desde 1996. Recuperado

en: <http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anales>

[4] Ver informe 2005 de la CIDH. Recuperado

en: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4.htm>

[5] Informe del CINEP Balance gobierno Uribe 2002-2010. Recuperado

en: <https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20101101.ciendias70.pdf>

[6] El anterior Ministro de Defensa del pasado gobierno Santos declara que el asesinato de líderes se trata de líos de faldas, recuperado

en: <https://www.elespectador.com/noticias/politica/asesinatos-de-lideres-son-por-lios-de-faldas-ministro-de-defensa-articulo-728893>

[7] En las negociaciones de la Habana se incluyen lineamientos para garantizar la vida de estas personas. En 2015 se emitió el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, Decreto 898 de 29 de mayo de 2017; Decreto 1581 de septiembre 28 de 2017; Decreto 2078 del 7 de diciembre de 2017; Decreto 2252 del 29 de diciembre de 2017; Decreto 660 del 17 de abril

de 2018.

[8] Ver informe de la fundación pares

<https://pares.com.co/2018/12/10/los-lideres-asesinados-tienen-rostro/>

[9] Ver el mapa

<http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2018/Documents/MUNICIPIOS.pdf>

[10] En relación a este megaproyecto leer.

<https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/hidroituango-asesinato-de-dos-lideres-sociales-que-se-oponian-al-proyecto-energetico/40986> y

<https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/que-sucede-con-hidroituango-en-antioquia-y-los-lideres-sociales/40942> y

<https://pacifista.tv/notas/asesinato-de-un-lider-la-punta-del-iceberg-del-conflicto-social-en-hidroituango/>

[11] Ver informe del cinep y otras entidades sobre la los patrones de los líderes sociales en el post acuerdo

<https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/>

[12] Pese a repudiable atentado que este grupo realizó contra La Policía Nacional hace pocos días y mató a jóvenes en formación de la institución.